

Más allá de la informalidad

José Luis Coraggio

Emilio Pradilla

Lucía Ruiz

Mario Unda

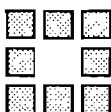
Quito, Ecuador 1995

CIUDAD

Centro de Investigaciones

Fernando Meneses 265 • Casilla 17-08-8311

Tel: 225198 • Fax: 593-2-500322 • Quito-Ecuador



Autores: José Luis Coraggio, Emilio Pradilla,
Lucía Ruiz, Mario Unda.

Primera Edición: CIUDAD, 1995

Copyright: CIUDAD

Portada: Ilustración, Pastel de Jorge García S. / TOYA / CIUDAD

Quito, Ecuador, 1995

Este libro se imprimió en los talleres
del Centro de Investigaciones CIUDAD.

Septiembre 1995.

Quito - Ecuador

787 i CORAGGIO, José Luis; PRADILLA, Emilio;
RUIZ, Lucía; UNDA, Mario.

Más allá de la informalidad, CIUDAD, Quito,
1995, 148p.

/SECTOR INFORMAL URBANO; ECO-
NOMIA POPULAR/PEA/INGRESOS/SU-
JETO POPULAR/ORGANIZACION SO-
CIAL.



Índice

Del sector informal a la economía popular <i>José Luis Corragio</i>	9
El mito neoliberal de la "informalidad" urbana <i>Emilio Pradilla</i>	29
Sector moderno y sector informal en Quito y Guayaquil <i>Lucía Ruiz</i>	53
Cristales empañados ¿Son los "informales" un nuevo sujeto? <i>Mario Unda</i>	97

EL MITO NEOLIBERAL DE LA “INFORMALIDAD” URBANA

Comentario al libro “El Otro Sendero”,
de Hernando de Soto (Editorial Diana,
México, D.F., 1987. 5ta. edición en español)*

*Emilio Pradilla***

El libro **El otro sendero**, del industrial y burócrata internacional peruano Hernando de Soto, se ha convertido en un best seller en México y en los demás países latinoamericanos, donde ha sido publicado, su fama ha llegado hasta la misma Casa Blanca, cuyo inquilino, el Presidente norteamericano Ronald Reagan, lo consideró tan “importante” que le dedicó unos minutos en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, recientemente celebrada, para hacer su elogio y recomendar su lectura a todos los gobernantes del mundo. El prólogo, redactado por el conocido escritor Mario Vargas Llosa, constituye un gancho publicitario y un resumen concentrado del mensaje ideológico y político del autor, el cual comparte. El libro se basa en los resultados de una investigación empírica y factual desarrollada por el Instituto Libertad y Democracia, financiada con recursos de agencias norteamericanas y asesorada por profesores universitarios de ese país, cuyo objeto de es-

* Este artículo apareció en REVISTA INTERAMERICANA DE PLANIFICACIÓN. Vol. XXII, núm. 85. enero-marzo, 1988. Sociedad Interamericana de Planificación, SIAP, México D.F. México.

** Profesor Titular del Departamento de Teoría y Análisis, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco. Profesor de asignatura del Doctorado en Urbanismo, División de Estudios de Posgrado, Unidad de Investigación y Docencia, Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

tudio fue las tres manifestaciones más importantes, a juicio de los autores, de la "informalidad urbana" en Lima, capital de Perú: la "vivienda informal", el "comercio informal" y el "transporte informal", a partir de la cual se generalizan las conclusiones a todos los países latinoamericanos y, aún, del Tercer Mundo, y se propone una "nueva política de desarrollo" para ellos.

El éxito alcanzado por la publicación entre los empresarios, políticos, tecnócratas e intelectuales universitarios, quienes no logran encontrar alternativas para el subempleo, el desempleo, la miseria y las carencias y necesidades de los sectores mayoritarios de la población urbana, agravados hasta límites insoportables por la larga fase de recesión económica, y para las cuales De Soto supone haber encontrado soluciones, justifica llevar a cabo una crítica lo más profunda posible.

1. La mistificación del sector "informal"

En palabras de Vargas Llosa, "A diferencia de otros ensayos económicos y sociales sobre América Latina, cuya abstracción y charlatanismo los aleja de toda realidad específica, El otro sendero se mueve siempre en lo concreto y, a partir de un fenómeno hasta ahora mal estudiado y peor comprendido -la economía informal-, propone un camino de solución para los problemas de los países subdesarrollados que está en total entredicho con el que han tomado la mayoría de los gobiernos y las élites políticas, progresistas o conservadoras, de esos países, pero que -es la tesis central del libro- es el que han elegido, por intuición y por necesidad, los sectores desfavorecidos". Este ambicioso, casi mesiánico, objetivo se sustenta en algunas tesis simples: la economía "informal" es una respuesta popular, espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones elementales de los pobres, el sistema legal (la "mala ley") está concebido para favorecer a los favorecidos y castigar a los que no lo son; la economía "informal" aparece como una puerta de salida del subdesarrollo que ya han comenzado a franquear muchas de sus víctimas "... en un proceso que está revolucionando desde su raíz a la economía...", es una falacia que el atraso latinoamericano se deba a la adopción del liberalismo económico después de la Independencia, a la apertura a las fuerzas ciegas del

mercado o a la voracidad imperialista, como causas de las abismales desigualdades internas entre pobres y ricos, pues Perú y los demás países del área no han tenido una economía de mercado, sino una mercantilista como las existentes en Europa en la Baja Edad Media; el Estado debe abandonar su política "redistributiva" de una inexistente riqueza, para garantizar, mediante "buenas leyes", el acceso de todos a la propiedad privada y a la libre competencia; "... la opción de los informales no es el refuerzo y magnificación del Estado, sino su radical recorte y disminución. No es el colectivismo planificado y regimentado, sino devolver al individuo la iniciativa y a la empresa privada la responsabilidad de dirigir la batalla contra el atraso y la pobreza...", en una "auténtica" economía de mercado; es fundamental que el Estado recuerde que "... antes de redistribuir la riqueza, hay que producirla".

El escritor famoso, recién llegado a las filas de la derecha política, con aspiraciones de líder de masas, enfatiza aún más que De Soto los rasgos fundamentales del planteamiento. Para ambos, la "informalidad" no es una expresión del atraso, sino su solución; se trata de destruir el "mercantilismo" ancestral y construir una verdadera economía de mercadeo apoyándose en ella. Es el "Estado redistributivo", y no el capitalismo y el imperialismo, el responsable del subdesarrollo. Nuestros países están construyendo, mediante la actividad "informal", una sociedad ideal de pequeños propietarios privados que compiten libremente en forma igualitaria y democrática. Tanto el autor del libro, como el de su prólogo, se visten con un ropaje populista mediante la mistificación de las actividades de subsistencia de las depauperadas masas latinoamericanas, pero haciendo abstracción u ocultando la realidad concreta de las economías capitalistas y de su actual crisis; mostrando una real o aparente ignorancia absoluta de la historia mundial y echando por tierra toda lógica de análisis científico, aún la que suponen tener el empirismo y el neopositivismo, vuelven al pasado para pedir prestadas las ideas de la pequeña burguesía liberal de los inicios del capitalismo y de las revoluciones burguesas. Tratan luego de fundirlas con el neoliberalismo reaccionario dominante en los países imperialistas y en su burguesía transnacional, que en la crisis actual se lanza en contra del Estado interventor que ella misma construyó en el período de auge para garantizar la acumulación capitalista a escala mundial, al tiempo que descarga

sobre los hombros de sus trabajadores el pesado fardo de la crisis y de su propia supervivencia. Esto explica el caluroso apoyo dado por Reagan al libro de De Soto.

Aunque no hay nada nuevo en la investigación ni en los planteamientos del libro, conocidos ya en otras plumas dismanteladas en su tiempo por la crítica, dedicaremos estas páginas a discutir lo más sobresaliente del mito de la "informalidad", homóloga del de la "marginalidad", pues estas ideologías renacen cada día.

2. Un punto de partida equivocado

Como todo camino, El otro sendero de Hernando de Soto tiene un punto de partida, pero es equivocado. Al preguntarse sobre el origen de los integrantes del llamado "sector informal" urbano, responde que provienen de las migraciones campesinas, lo cual es solo parcialmente válido. En los inicios del proceso acelerado de urbanización, la mayor parte del crecimiento poblacional de las ciudades era aportado por los inmigrantes campesinos; pero a medida que éstas se fueron consolidando, sus hijos citadinos fueron modificando la relación, reduciendo el peso de los recién llegados; actualmente, una gran parte de los "informales" son nacidos en la misma ciudad. Si lo vemos desde el ángulo del origen del desempleo (punto de vista más adecuado si queremos explicar el constante crecimiento de los "informales" y sus actividades), desde hace más de una década la crisis de las economías capitalistas latinoamericanas ha añadido a su incapacidad estructural de absorber a los migrantes campesinos, la de generar una masa creciente de desempleo abierto (quienes tenían empleo estable y lo perdieron) como resultante del despido de obreros y empleados por la recesión de la industria, el comercio y el sector agropecuario, íntimamente ligada a la contracción del mercado interno por la caída de la capacidad adquisitiva de los salarios y las restricciones del mercado internacional para los productos de exportación, como efecto del proteccionismo de los países capitalistas avanzados y la reducción de los precios de las materias primas.

En la medida en que no hay indicios de que la crisis de las economías latinoamericanas esté llegando a su fin, y que, por el contrario, las de los países desarrollados se acercan a una nueva recesión, anunciada

por el crack bursátil y la crisis monetaria en curso -que se transmitiría a las primeras-, tenemos que suponer, necesariamente, que las dos determinantes del desempleo se mantendrán. Sin embargo, una hipotética salida de la recesión tampoco significaría la desaparición del desempleo, pues las políticas anticrisis aplicadas en la región bajo la presión del Fondo Monetario Internacional y la banca multinacional, la austeridad del gasto público (explícitamente apoyada por De Soto como una forma de contracción), y la reconversión o modernización de la economía, suponen un aumento de la productividad y una reducción de la fuerza de trabajo necesaria, al ser reemplazada por máquinas automatizadas, robots y computadoras. El neopositivismo del autor y su incapacidad para salir del mundo cerrado de la “informalidad” construido por él (lo que no ocurre en la realidad con las actividades de subsistencia que pretende analizar, pues ellas están estrechamente articuladas o subsumidas formal o realmente al conjunto de la economía) le impiden ver los procesos económicos globales y el papel jugado en ellos por los países imperialistas, cuya existencia niega ideológicamente. Como buen burgués, no puede ver ni aceptar la existencia objetiva de la crisis, contradictoria con el supuesto equilibrio de las relaciones sociales, apologéticamente publicitado por el neoliberalismo y la economía monetarista; la dominación y la explotación imperialista como el resultado natural de la ley del más fuerte; y la usura de los banqueros internacionales como el precio correcto del dinero establecido por la relación entre la oferta y la demanda.

Pero volvamos al punto de partida. Para el autor, las determinantes de las migraciones campesinas son: “... la construcción de carreteras...” en las áreas rurales, “... el posterior desarrollo de otros medios de comunicación...”, “la crisis que afectó al agro (peruano) entre 1940 y 1945 ...”, “... el problema de los derechos de propiedad en el campo...”, “... la menor mortalidad infantil en Lima...”, “... las posibilidades de una mejor remuneración...” en la capital y “... el propio crecimiento de la administración pública y la posibilidad de acceder a niveles educativos más altos...” (pp. 8 a 10).

La generalización de los planteamientos a toda Latinoamérica hecha por De Soto, y la gran masa de investigación desarrollada sobre el tema en Perú y otros países del área, ignorada o rechazada por razones

ideológicas, nos autorizan a criticar este planteamiento simplista y reductor, 30 años viejo, y más ampliamente expuesto por los marginalistas de la escuela de DESAL (cuya crítica realizamos hace más de una década). Si exceptuamos el factor "crisis agraria", limitado temporalmente por el autor, y los "problemas del derecho de propiedad", todos los demás son externos al campo mismo y sus relaciones económicas, sociales y políticas, y aparecen como aspectos ideológicos no objetivos. Como por encanto, desaparecen los procesos de expropiación violenta o pacífica de las tierras de los pequeños campesinos parcelarios y de las comunidades indígenas realizadas por los grandes terratenientes y la burguesía agraria para crear las condiciones del desarrollo capitalista agrario necesario para la agroexportación y la acumulación capitalista industrial, la cual, dicho sea de paso, dio origen a la Revolución Mexicana, a la Boliviana, a la guerra civil conocida como "la violencia" en Colombia, así como a enfrentamientos armados en muchos países de la región, incluido Perú, ignorados en el texto, pero satanizados en las conclusiones.

Se olvida también la proletarianización y semiproletarianización del peonaje en las grandes empresas agropecuarias en condiciones salariales y laborales más duras que las imperantes en las ciudades; la incapacidad del campesinado parcelario para resistir la competencia desigual con los burgueses agrarios, la pérdida consecuente de sus mercados y la pauperización acelerada; su imposibilidad de aumentar la productividad mediante las mejoras técnicas, mientras sus tierras se esterilizan por la sobreexplotación; el efecto del crecimiento demográfico sobre la miniaturización de las parcelas, estrechamente ligado al inoperante derecho de propiedad privada tan alabado por el autor; etc. Cabe señalar que la existencia de derechos plenos de propiedad individual o comunitaria (en los ejidos mexicanos o las comunidades indígenas de este u otros países) no ha sido obstáculo para la expropiación por parte de los terratenientes o el obligado abandono de las tierras; por el contrario, los han facilitado.

Podríamos continuar desarrollando este tema, pero creemos que en América Latina existe un acervo de investigación rigurosa sobre el tema -al cual remitimos a los lectores- que muestra claramente la fragilidad del punto de partida del "otro sendero". Quisiéramos añadir

simplemente que De Soto, a pesar del populismo con el que trata de vestirse, considera al campesinado como objeto inerte de determinaciones secundarias, como la atracción de la radio, a fin de poder esquivar las principales, que lo llevarían a tener en cuenta el desarrollo capitalista agrario como factor explicativo fundamental de la expulsión de campesinos y su migración a las ciudades.

3. La vivienda “informal”, solución o problema?

En *El otro sendero*, Hernando de Soto describe ampliamente los resultados de su investigación sobre la llamada vivienda “informal”, asumiéndola correctamente como uno de los fenómenos más importantes y característicos de la ciudad latinoamericana y particularmente de Lima. Ciertamente, la vivienda autoconstruida representa entre el 50 y el 90% del total del parque habitacional urbano en nuestros países; pero en éste, como en otros aspectos del trabajo, su ideología pequeño-burguesa distorsiona la descripción y la interpretación de la realidad. Su objetivo es demostrar apriorísticamente que la vivienda producida “informalmente” es más importante cuantitativamente que la construida por el Estado y el sector “formal”, que acumula una mayor inversión, que desarrolla la participación individual y colectiva en el marco de una racionalidad superior, que da lugar a un derecho extralegal (el “expectativo de propiedad”, que no es más, añadimos nosotros, que el tradicionalmente conocido como de posesión o apropiación real sin título jurídico de propiedad), que “... las mediaciones mencionadas (malas leyes, trámites burocráticos interminables y costosos y corrupción de los administradores públicos que entorpecen la obtención de la propiedad y la legalización de la construcción, particularmente para el sector popular -hechos reales que a nuestro juicio son adecuadamente percibidos-) confirman que una causa fundamental de que la gente prefiera invadir y edificar sus viviendas al margen de la ley es que el canal establecido para acceder a la propiedad inmobiliaria para vivienda se encuentra severamente restringido” (p. 181). Que, por lo tanto, una “buena ley” que facilite el acceso a la propiedad privada del suelo y a la producción “informal” de la vivienda y su libre desarrollo es la solución a la grave penuria de este bien esencial para la subsistencia de la población urbana.

En estos planteamientos no hay realmente nada nuevo. En el campo de la investigación académica, ellos fueron desarrollados ampliamente por John F. C. Turner y sus seguidores, convertidos en apologistas de la autoconstrucción desde finales de la década de los 60s, con la ventaja de que incluían aspectos no tocados por De Soto, como el proceso mismo de construcción, la localización en relación con la ciudad, la movilidad de la población entre diferentes formas de vivienda, etc. Los gobiernos latinoamericanos, la Alianza para el Progreso y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos pusieron en marcha programas de autoconstrucción de vivienda, infraestructura y servicios después de la reunión de Punta del Este en 1961, bajo diversos nombres ("ayuda mutua", "esfuerzo propio", "desarrollo comunitario" o "progresivo", "pies de casa" o "lotes con servicios"). Desde mediados de la década de los 70s, el Banco Mundial, dirigido por el tristemente célebre Robert McNamara, había asumido a la autoconstrucción como la única alternativa para los sectores populares urbanos, y durante todos estos años de crisis económica y austeridad estatal se ha mantenido como tal. El hecho de que en la práctica los programas reales impulsados por los gobiernos hayan sido muy limitados y que los pobladores hayan tenido que continuar autoconstruyendo las viviendas por sus propios medios en terrenos ocupados ilegalmente o adquiridos a fraccionadores irregulares, hay que explicarlo a partir de sus determinaciones estructurales (la carencia de empleo, los bajos salarios, la ausencia de condiciones para ser sujetos de crédito, las estructuras monopólicas de la propiedad de la tierra y del sector inmobiliario, etc.) y coyunturales (crisis económica, financiera y fiscal, caída de los ingresos, austeridad estatal, etc.) y no simplemente legales. De Soto no lo hace, como tampoco lo hizo Turner, por lo que ninguno logra establecer la naturaleza del proceso y sus contradicciones. Muchos investigadores críticos latinoamericanos y de otros continentes han mostrado el carácter científico, encubridor e ideológicamente burgués de estos planteamientos y han realizado investigaciones concretas amplias y rigurosas acerca del problema de la vivienda en América Latina.

La concentración monopólica de la propiedad del suelo urbano y urbanizable, y las elevadas y parasitarias rentas del suelo que se apropian los terratenientes al introducirlas en el mercado; la acumulación

de ganancias de los fraccionadores, productores e intermediarios comerciales de los materiales de construcción, así como de los promotores y constructores de las viviendas adecuadas y agentes financieros; la inflación galopante y las crecientes y elevadísimas tasas de interés bancario e hipotecario que caracterizan el largo período de crisis; el carácter exclusivamente promocional y financiero de la acción estatal, que deja la ejecución real de sus programas de vivienda en manos del sector privado de la construcción con sus condiciones de fijación de precios; la gran magnitud del ejército de desempleados - generado por el desarrollo capitalista agrario e industrial- carentes de empleo estable y de ingresos suficientes y que por lo mismo no pueden ser "sujetos de crédito" de los organismos públicos o privados de vivienda; las agudas condiciones de explotación a que son sometidos los obreros o empleados de los monopolios nacionales o transnacionales, y, en el período actual, la constante reducción de los salarios reales; las limitadas concesiones que han hecho las patronales y los Estados de la región en el campo de las prestaciones sociales (salario indirecto o diferido), tales como los Fondos de Vivienda para los Trabajadores, o la privatización y liquidación de los mismos por gobiernos autoritarios y, posteriormente, por todos los de la región, en el marco de las políticas de austeridad pactadas con el Fondo Monetario Internacional para tratar de resolver el problema de la deuda y superar la recesión bajo la inspiración y el soporte ideológico del neoliberalismo (corriente en la que objetivamente se localiza De Soto), he ahí las reales determinaciones de la persistencia y magnitud de la autoconstrucción de vivienda.

Lo que está determinado por las condiciones de explotación vigentes, lo que constituye una penosa forma de subsistencia impuesta a los sectores mayoritarios de la población por las estructuras económicas y sociales imperantes, no puede ser convertido en la "solución ideal" al problema de la vivienda. Si los pobladores se organizan y luchan para conquistar el derecho al suelo y a la vivienda, si adquieren conciencia política y de clase en ella, no es porque sea la solución racional y adecuada, sino porque es la única que les queda dentro de la situación actual.

4. El comercio "informal" o la redistribución de la pobreza

Entre las múltiples actividades desarrolladas por los desempleados urbanos latinoamericanos para obtener los ingresos necesarios a la subsistencia, el comercio callejero se destaca por su presencia bulliciosa en las plazas, parques y calles de los centros comerciales, en los cruceros de las vías importantes, en las paradas de los medios de transporte público, en torno a los mercados, en las obras en construcción, o en cualquier otro lugar de concentración de los ciudadanos. Los vendedores ambulantes o semifijos son la expresión más evidente de la imposibilidad estructural que tienen las economías de los países capitalistas semi-coloniales para absorber en su estructura económica a la totalidad de la población económicamente activa y pagar por su valor real a la fuerza de trabajo, obligando así a los trabajadores en edad activa a realizar estas improductivas y mal remuneradas tareas, y a los ancianos, a las mujeres y niños a complementar los ingresos familiares con el producto de su penosa actividad.

La venta callejera significa para quienes la realizan, agotadoras jornadas de trabajado a merced de las inclemencias del tiempo y la represión o extorsión de los "guardianes del orden público" o la burocracia local, la carencia de servicios sanitarios y de asistencia social, la exposición directa y prolongada a la contaminación del aire y al ruido ensordecedor del tránsito, la ausencia de ingresos estables y el sometimiento a la voracidad de los "coyotes" e intermediarios de las mercancías, los cuales se apropian de una parte sustancial de las raquíticas ganancias. Sin embargo, se encuentran subordinados, subsumidos por el gran capital monopolista transnacional o nacional, cuyos productos realizan directamente o después de una transformación primaria (cigarillos, chicles, dulces, hot dogs, juguetes, cosméticos, ropa, aparatos eléctricos o electrónicos de contrabando, etc.), y al cual entregan la ganancia normal; a pesar de ello, son blanco del ataque permanente del comercio "formal" que los acusa de hacer competencia desleal, entorpecer el tránsito vehicular y peatonal, afeor los lugares turísticos y evadir los impuestos. Salvo en los casos de la venta de artículos de contrabando (que corresponde a otro estrato diferente, pues requiere de capital para invertir), los clientes pertenecen a los sectores populares,

dando lugar a una redistribución de la pobreza; en el caso de la venta de comestibles, sirven a la reproducción a bajo costo de los trabajadores, beneficiando así a sus patronos, situación generalizada con la crisis.

En *El otro sendero*, Hernando de Soto reconoce y describe todo lo anterior, pero su afán de encuadrar la realidad dentro de su ideología liberal de viejo cuño y nuevo ropaje lo lleva a construir un cuento de hadas sobre el “comercio informal”. En primer lugar, esconde la diferencia entre los vendedores ambulantes reales y los medianos o grandes capitalistas que “informalmente” se colocan como eslabones entre estos y las empresas proveedoras, o la poderosa “lumpen-burguesía” de contrabandistas, especuladores, narcotraficantes, traficantes de mujeres, o caciques y coyotes extorsionadores; mantiene la misma confusión entre los artesanos y los empresarios pequeño-burgueses o burgueses de talleres y maquiladoras clandestinas que sobreexplotan a sus trabajadores para mantener su tasa de ganancia y sobrevivir en la competencia con las grandes empresas a pesar de su baja productividad (el sismo de septiembre de 1985 en la ciudad de México sacó a la superficie la brutal explotación de las costureras en estas maquiladoras). En segundo lugar, dota a los desheredados de la ciudad capitalista semicolonial de una racionalidad weberiana, convirtiéndolos, sin que ellos lo sepan, en los émulos de los comerciantes, maestros artesanos y usureros protestantes que empezaron a construir el capitalismo inglés en las entrañas del feudalismo hace varios siglos, ocultando que la “libre competencia” entre los pequeños comerciantes y artesanos y las grandes empresas monopólicas industriales, comerciales y de servicios es ya imposible.

Para De Soto, “... el comercio ambulatorio es un largo camino hacia la empresa y la propiedad privadas...”, “... la historia del comercio informal es la historia de un largo camino -entorpecido por una excesiva politización- hacia los mercados que representan la aspiración popular por obtener una propiedad privada segura para poder desarrollar sus actividades comerciales en un ambiente propicio...”, “La solución ideal sería retirar obstáculos y convertir los estímulos políticos en facilidades legales para liberar y multiplicar las energías empresariales de los ambulantes, y para que dentro del proceso competitivo en que se encuentran inmersos puedan explotar al máximo sus habilidades y servir más eficazmente a la comunidad” (pp. 67 y 101). Estamos de acuerdo con De

Soto en que es necesario eliminar las barreras legales y, sobre todo, las represivas, para permitir que los desempleados encuentren alternativas propias de subsistencia ante la incapacidad del sistema para brindarles el ingreso mínimo vital; pero esto no constituye ninguna "solución ideal", como pretende. La solución real es garantizar, efectiva y no demagógicamente, el derecho al trabajo estable y bien remunerado y los servicios sociales esenciales a toda la población trabajadora, lo cual es imposible en las economías capitalistas (de mercado) dominadas por las burguesías imperialistas, como lo demuestra la historia económica.

En la actual situación de crisis económica profunda y persistente, más de la mitad de la población urbana latinoamericana, incluyendo ancianos, mujeres en cinta o con niños de pecho y niños en edad escolar, subsiste mediante la realización de actividades que caben dentro de la elástica definición de "informales", pero que nadie con dos dedos de frente podría calificar de "soluciones ideales": prostitución, robo menor o mayor a mano armada, lanzallamas, limpieza de coches en marcha, venta en la mitad de las calles, narcotráfico menor, pepenado en los basureros públicos, etc. Es también absurdo afirmar que un afilador de cuchillos, un compra-vendedor de papel viejo, un voceador de prensa, un pepenador de desperdicios, una india que vende papitas fritas o artesanías baratas, un niño embolador o un raponero, tienen como objetivo racional el llegar a ser empresarios; igualmente lo es suponer que todos ellos podrán acumular los recursos necesarios para adquirir un puesto en un mercado o subir a otros niveles de comercialización empresarial.

Los países latinoamericanos cuentan con una enorme riqueza de recursos materiales y humanos que han hecho posible la rapiña innegable realizada durante siglos por las potencias imperialistas y por los burgueses "nacionales" cuyos capitales, equivalentes al total de la deuda externa latinoamericana, se han fugado a los países desarrollados, mientras que los trabajadores latinoamericanos la pagan duramente con el desempleo o mediante la reducción de sus salarios reales por la austeridad salarial y del gasto público en servicios sociales. No es la "buena ley" la que podrá cambiar esta situación, sino una profunda y radical transformación de las estructuras económicas y socio-políticas que rompa con la dependencia y coloque a las fuerzas productivas sociales en manos de los trabajadores.

5. El transporte “informal” y el caos urbano

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas, una gran parte de las necesidades de transporte de pasajeros se encuentra cubierta por una heterogénea combinación de sistemas y medios privados que incluyen automóviles, combis, microbuses y autobuses de muy diferentes formas, tamaños y capacidades. Es la respuesta privada a una demanda creciente de la población no satisfecha por el Estado y que garantiza a los propietarios niveles de rentabilidad que justifican la inversión patrimonial o capitalista.

A excepción de Buenos Aires, que construyó tempranamente su tren subterráneo o metro, el puñado de ciudades que cuentan con este servicio (el más racional y “limpio” en relación con el medio ambiente) iniciaron su instalación después de la mitad del siglo, cuando el crecimiento físico y poblacional había convertido el transporte en un grave problema, con un retardo enorme, teniendo en cuenta los límites presupuestales y las barreras impuestas por la densa y anárquica estructura urbana y los intereses opuestos de los transportistas privados; hoy en día muchas grandes ciudades apenas cuentan con proyectos sin fecha, o ni siquiera piensan en ello. El desarrollo de sistemas públicos de tranvías, trolebuses o autobuses es escaso e insuficiente, debido a las concepciones contrarias de los empresarios y sus expresiones políticas en el poder, los altibajos en su sucesión en el gobierno, y la limitación, en muchos casos voluntaria, de la inversión en este campo, de interés esencialmente para los trabajadores y para otros sectores populares urbanos. La historia de nuestras ciudades está llena de movilizaciones populares contra las onerosas tarifas de los medios privados, sus irracionales itinerarios, sus malas condiciones, y en demanda de la ampliación del servicio estatal.

El servicio prestado por los medios privados, en especial por los “colectivos”, combis o microbuses, genera importantes contradicciones. Las rutas se definen en función de los intereses económicos de los propietarios y no de los usuarios, dando lugar a recorridos tortuosos demasiado largos en tiempo y distancia que se superponen conflictivamente en las áreas centrales, causando embotellamientos de tránsito y entorpeciendo su propia circulación. Sus tarifas, que crecen constantemente en función de los procesos inflacionarios y los precios del

equipo automotriz nuevo (aunque el que se utiliza sea antiguo y haya sido ya amortizado), son excesivamente elevadas para los asalariados y los desempleados, sobre todo cuando el trazo de las rutas obliga a la combinación de varias de ellas, incrementando el costo del viaje, sin que sea posible utilizar los sistemas multimodales, de uso generalizado en los países desarrollados. Es corriente la utilización de equipo rodante obsoleto, en mal estado, "acondicionado" artesanalmente, incómodo para el usuario (sobre todo en las horas "pico" cuando se sobresatura su capacidad) y altamente contaminante. La imposibilidad de un control público efectivo sobre su desplazamiento y los lugares de "paradas", la competencia por los pasajeros, la escasa capacitación de los conductores y la sobrefatiga por jornadas de trabajo excesivamente largas son causa de frecuentes coaliciones con otros vehículos causando accidentes a los pasajeros.

La multiplicación de estos improvisados medios de transporte en las ciudades latinoamericanas, es uno de los componentes fundamentales del caos urbano y de la impotencia de los Estados nacionales o locales para planificar las ciudades y crear y mantener esta condición general de la reproducción de la población que, por su naturaleza, debe ser asumida por éstos en base a la tributación fiscal de todos los ciudadanos. Aunque una parte considerable de las unidades de transporte pertenecen a pequeños propietarios -no necesariamente de las capas más pobres, dado que el costo de ellas es muy elevado en la región, en razón de las irracionales condiciones de funcionamiento de la industria automotriz- en las asociaciones, cooperativas o empresas dominan quienes son dueños de varias unidades, quienes se encuentran en la mejor posición para acumular capital, convertirse en verdaderos empresarios e imponer a los demás sus propios intereses, hasta llegar a desplazarlos y apoderarse de las unidades y el control de las organizaciones. Los conductores asalariados son víctimas de una explotación aguda: bajos salarios en la forma de participación en la tarifa cobrada a cada usuario, lo que determina largas jornadas de trabajo para obtener el mínimo de subsistencia; alteración de las tarifas para obtener excedentes; peligrosa competencia con los demás vehículos para ganar volumen de pasajeros; fatiga excesiva y malos tratos a los pasajeros; ausencia de posibilidades de organización sindical defensiva debido al reducido número de choferes

de cada propietario y al paternalismo aparente de las relaciones entre unos y otros; ausencia de prestaciones laborales y, particularmente, de seguridad social; atención médica, seguros de vida y defensa legal en casos de accidentes; rotación constante para evitar la estabilidad laboral y sus consecuencias económicas para los propietarios; y, en la situación de violencia urbana determinada por la profunda y larga crisis económica, la continua exposición a los robos y a las agresiones.

La mistificación del transporte “informal” como alternativa “racional” a las necesidades de la población urbana y como “nuevo sendero” para la subsistencia de los desempleados, su conversión en empresarios privados y el desarrollo de la “libre competencia”, lo único que logra es ocultar la realidad y publicitar las antipopulares ideas neoliberales que niegan la obligación que tiene el Estado de asumir la satisfacción adecuada de la necesidad de transporte urbano y el derecho que tienen los ciudadanos a obtener el retorno de parte de su tributación fiscal bajo la forma de subsidios, y pretender que se convierta solamente en la correa de transmisión que transfiere los fondos públicos a los empresarios privados. Si llegaran a ganar definitivamente la guerra contra las empresas públicas, muchas de cuyas batallas parciales los ha favorecido, los transportistas privados continuarían acelerando el proceso de agudización de la anarquía urbana y la más rápida contaminación ambiental, características actuales de la ciudad capitalista semicolonial, que tan pesadamente recaen sobre las espaldas de los sectores populares.

6. El Estado y el derecho según los neoliberales

Mario Vargas Llosa y Hernando De Soto piden prestados los métodos de la vieja filosofía idealista hegeliana para “explicar” el atraso en que se encuentran los países latinoamericanos, su situación de crisis, los acuciantes y aparentemente insolubles problemas urbanos, el gigantesco y creciente desempleo, las múltiples actividades de subsistencia que realizan los sectores populares para sobrevivir (la llamada “informalidad”) y las extremas condiciones de miseria en que lo hacen. Según ellos, todo es el resultado de la “mala ley” y del “Estado Redistributivo”; “... la modernización de los países de economía de mercado (los “desarrollados”), que exigía que la producción y el trabajo se volvieran más

especializados y las transacciones más sofisticadas, fue posible porque el Derecho permitió reducir los costos de las transacciones”, mientras que en los países “mercantilistas” latinoamericanos ello no ha sido posible porque “... entre quienes formulan la ley existe una tradición de utilizar el Derecho como un instrumento para redistribuir la riqueza y no para facilitar su creación. En este sentido, la ley es vista esencialmente como un mecanismo que permite repartir un stock fijo de prosperidad entre los distintos grupos de interés que así lo demandan”. “... De esta manera, politización, centralización y burocratización resultan hijos del mismo padre, el Derecho Redistributivo”. Y sumariamente Mario Vargas Llosa añadirá: “Lo fundamental es que este Estado recuerde siempre que antes de redistribuir la riqueza hay que producirla”.

La solución es, pues, simple y lógica: hay que despolitizar, descentralizar, desburocratizar, adelgazar y contraer al Estado, y mediante las “buenas leyes”, abrir el camino a la “libre empresa”, a la “libre iniciativa” de los ciudadanos, para que creen lo más fácilmente posible la riqueza, y cuando ya haya suficiente, se verá como se distribuye. Por ahora, el Instituto Libertad y Democracia está dedicado a elaborar las “buenas leyes”, que, si son puestas en práctica, abrirán el camino para la instauración de una verdadera “economía de mercado democrática” capaz de superar la crisis y el atraso secular de nuestros países. Si no conociéramos las explicaciones de la crisis y las soluciones planteadas por el Fondo Monetario Internacional y los burgueses, burócratas, tecnócratas y políticos neoliberales de los países semicoloniales e imperialistas (con Reagan a la cabeza), y las graves consecuencias que han tenido sus políticas para las masas trabajadoras del mundo entero, podríamos pensar que se trata de un buen pequeño burgués de principios de la revolución industrial (fines del siglo XVIII) sentado en un café londinense haciendo partícipes a sus amigos de sus geniales ideas para hacer que el capitalismo se desarrolle y venza, pacíficamente, al feudalismo.

Desde su consolidación como Estados Nacionales después de la independencia de España y Portugal y las luchas intestinas que la sucedieron, los gobiernos latinoamericanos -independientemente de su carácter democrático parlamentario, bonapartista progresivo o regresivo o semifascista- han impulsado, a su manera y según la ideología política

de las clases dominantes en el poder o detrás de él, el proyecto de desarrollo capitalista en las únicas condiciones históricamente posibles para ellas: bajo la dominación imperialista y en asociación desigual con el gran capital monopolista internacional.

En la expansión y en la recesión, las economías latinoamericanas se han desarrollado en el marco de la libre competencia entre los grandes monopolios nacionales, extranjeros o asociados, en la medida en que no podían hacer retroceder el carro de la historia y apoyándose para ello en la aguda explotación de los trabajadores del campo y de la ciudad, y generando un enorme y permanente ejército de desempleados concentrados en las ciudades, carentes de las mínimas condiciones de subsistencia y forzados a vivir de la migajas obtenidas mediante las más diversas y penosas formas de subsistencia. Los regímenes políticos, democráticos o dictatoriales garantizaron las condiciones legales y políticas de esta explotación, válidas para todos los estratos del capital.

La larga fase de crisis económica por la que atraviesa la región no ha hecho más que agudizar la polarización de una distribución de la riqueza creada por los trabajadores, que siempre fue abiertamente desigual; los Estados no han redistribuido sino el mínimo indispensable para mantener biológicamente a la fuerza de trabajo necesaria al capital y a la legitimidad del régimen político y social, o aquello que han conquistado los trabajadores con sus luchas reivindicativas, y esta parte ha disminuido radicalmente con la crisis y las políticas de austeridad aplicadas en todos los países.

La fuga de capitales de la que habla De Soto no ha sido producida por la falta de "seguridad" y las cortapisas a la libre empresa y a la propiedad introducidas por el Estado, sino por la libertad de que gozan las transnacionales para repatriar el producto de la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, el libre movimiento especulativo de los capitales hacia afuera en busca de una mayor rentabilidad, y el pago del servicio de una deuda externa que fue contraída para mantener la acumulación del capital privado y realizar las inversiones en infraestructura y servicios necesarios para ella. Esto no puede ser ocultado mediante frases seudopopulistas basadas en investigaciones parciales e ideológicamente teledirigidas.

En lo que respecta a las ciudades, su crecimiento anárquico y sus múltiples y graves contradicciones, investigaciones mucho más serias, rigurosas y amplias han mostrado que ellas son precisamente el resultado de la territorialización del funcionamiento de la "economía de mercado" y sus soportes: la propiedad privada del suelo, el libre albedrío de los empresarios -particularmente de los constructores y promotores inmobiliarios-, la orientación de las políticas urbanas estatales hacia el apoyo a la acumulación capitalista y a los sectores de altos ingresos, y la fragilidad y limitación de los instrumentos económicos, jurídicos y políticos de que dispone el Estado para planificar y regular el crecimiento urbano. Los problemas están determinados precisamente por lo que nuestro autor propone como solución; como lo demuestra la crisis de las ciudades de los países desarrollados, es el capitalismo y la economía de mercado soñada por De Soto y Vargas Llosa lo que los genera.

El encogimiento del Estado, consustancial a la privatización de la economía, y la retracción de su intervención exigida por todos los neoliberales, debilitan las raquíticas posibilidades de planear y controlar el crecimiento urbano, y, al mismo tiempo, las de apoyar a la iniciativa privada, objetivo que ha sido siempre el suyo.

7. La ignorancia "informal" de la historia

Uno de los recursos clásicos de las ideologías y los ideólogos de derecha consiste en deformar los hechos históricos, ya sea por ignorancia o voluntariamente, para hacer que los mismos se amolden a sus concepciones del mundo o a sus intereses de clase, y con su apoyo venerable tratar de que los agentes sociales carentes de conocimiento histórico (por la exclusión clasista de la cultura, la separación entre trabajo intelectual y manual, la parcelación de la formación escolar o el dominio de la ideología burguesa) acepten como necesarios, eternos o inmutables los modelos arcaicos de sociedad que postulan. Vargas Llosa, De Soto y su promotor de ventas, Ronald Reagan, no son una excepción a la regla.

El primer paso en el procedimiento consiste en establecer el modelo histórico de la llamada "economía mercantilista" europea, a la cual ubican entre el siglo XVII y principios del XX (según el caso),

identificando, erróneamente, a las monarquías absolutas como la forma de Estado correspondiente, y a los terratenientes, maestros artesanos y comerciantes feudalizados, como las clases dominantes que la sustentaban. Luego se caracteriza a los burgueses, proletarios y campesinos (con tierra o sin ella) como "informales" e, identificando sus intereses históricos, se les asigna el papel de indiferenciados protagonistas de los procesos revolucionarios que liquidan al santinado "Estado mercantilista redistributivo", se clasifica como "democráticas" a las revoluciones pacíficas o que de una forma u otra condujeron a su modelo de "economía de mercado", y "totalitarias" a las que reinstauran un régimen "mercantilista" o, pero aún, uno transicional al socialismo. Finalmente, se previene contra los peligros existentes en Perú y América Latina de que los "informales" se rebelen contra el "mercantilismo" dominante, orientador por ideologías "totalitarias" de izquierda, y se concluye, obviamente, planteando el "ideal" (bastante viejo por cierto) de los neoliberales: el libre mercado, la libre iniciativa privada, el Estado no intervencionista, el parlamentarismo burgués y las "buenas" leyes que garantizarían esta estructura socio-política. La historia puesta patas arriba y convertida en caricatura.

Las monarquías absolutas europeas no fueron el régimen estatal del "mercantilismo", sino la última forma del Estado feudal, y los terratenientes aristocráticos, los maestros artesanos de los gremios, los comerciantes feudalizados y las jerarquías religiosas, los estamentos feudales descompuestos que las sustentaron. El mercantilismo es la primera fase del capitalismo (la llamada "economía de mercado"), no la última del feudalismo, y se contrapone a las relaciones feudales de producción, y son los burgueses la clase social fundamental en ella.

Demos una mirada a los ejemplos citados por De Soto y evidentemente tergiversados. En Inglaterra, la revolución burguesa cronwelliana, que no fue pacífica, fue hecha por los granjeros, los campesinos sin tierra y la burguesía, y después de consolidar su poder, aceptó a la monarquía parlamentaria. Los revolucionarios franceses de 1789 fueron los campesinos sin tierra, los obreros, la pequeña burguesía urbana y la burguesía; el imperio napoleónico fue el motor del desarrollo capitalista europeo y de la consolidación del Estado burgués; la república parlamentaria se instauró en oposición a los bonapartismos en un proceso

poco ejemplar desde el punto de vista de la moral; el proletariado francés se levantó en armas en varias ocasiones durante el siglo XIX, y una de estas revoluciones proletarias, la Comuna de París en 1871, fue ahogada en sangre por la burguesía contrarrevolucionaria. No se dice una palabra del fascismo italiano y del nazismo alemán y su brutal represión contra los obreros; ni de las poco democráticas guerras mundiales llevadas a cabo a un costo inmenso por las "economías de mercado" imperialistas como forma de competencia por los mercados y los recursos de las colonias; ni de las masacres cometidas por las burguesías europeas contra los obreros en las revoluciones alemanas y húngara. En la Rusia zarista no fueron los "informales", sino los obreros, los campesinos y los soldados los que hicieron las dos revoluciones: la demócrata de febrero, y la socialista de octubre de 1917 contra el Zar, los terratenientes y la burguesía nacional e imperialista. En España, la contrarrevolución franquista, fascista, ahoga en sangre a la República surgida contra la monarquía, instala un régimen opresivo que sirve al desarrollo de la "economía de mercado" y cuyo agotamiento abre las puertas a un régimen democrático-burgués con el mismo apoyo de clase. Una historia bastante distinta a la de De Soto.

Sería imposible y sin sentido contraponer la historia real latinoamericana a la ficticia de De Soto y Vargas Llosa. Nos limitaremos a señalar que la conquista y la colonia españolas ocurren en la fase de decadencia del feudalismo y de desarrollo de la acumulación originaria de capital, articulándose de múltiples formas a ella; que la independencia ocurre en medio del expansionismo y la derrota del imperio napoleónico y del capitalismo europeo y sus conflictos armados, y que en ella juegan un papel importante, tanto las ideas de la revolución burguesa francesa, como los intereses de los criollos y la ayuda militar y económica del "buen régimen democrático" inglés, cuyos capitales estuvieron presentes durante la primera época de los gobiernos democráticos o dictatoriales semicoloniales que se instauran en la región, hasta que fueron desplazados por los provenientes de la "economía de mercado" norteamericana; que las revoluciones populares de México y Bolivia fueron luego sometidas a los imperativos del desarrollo capitalista, y que, más recientemente, los movimientos democráticos contra las dictaduras represivas han conducido a regímenes políticos burgueses sin que haya

cambiado la estructura económica; que los regímenes militares en Perú y otros países no son idénticos los unos a los otros, a pesar del uso común del poder militar; que la Unidad Popular en Chile y el gobierno municipal de la Izquierda Unida en Lima no coartaron la libertad democrática, reprimida, en cambio, brutalmente, por el neoliberal Pinochet; que toda América Latina (excepción hecha de Cuba y Nicaragua), independientemente de sus regímenes políticos, se encuentra dominada por relaciones de mercado capitalista, bajo la hegemonía del capital transnacional y nacional asociados, y que la existencia del sector “informal” es una consecuencia de ello, etc. Serán los maestros artesanos o mercaderes feudalizados, los empresarios norteamericanos, japoneses y europeos que poseen la mayor parte de la industria, el comercio y la banca y que controlan las economías de la región? Serán Alan García, Alfonsín, Sarney, Barco y Lusinchi, señores feudales o reyes disfrazados?

Podemos imaginar que los asesores norteamericanos del Instituto Democracia y Libertad sean tan ignorantes de la historia de nuestros países; pero nos negamos a aceptar que un insigne literato o un asesor de las Naciones Unidas, con todas las condiciones para conocer al menos las obras de los historiadores liberales, lleguen a una versión tan pobre, simplista e ideológicamente deformada de nuestros pueblos.

8. Un modelo inhumano de sociedad y ciudad

Al finalizar la lectura del libro de Hernando de Soto, prologado por Mario Vargas Llosa y tan calurosamente elogiado por el Presidente Norteamericano Ronald Reagan, nos sentimos atónitos e indignados. El modelo “ideal” de sociedad y ciudad que en definitiva nos proponen estos neoliberales no nos es desconocido; diariamente los vivimos y ha sido durante años el objeto de nuestro trabajo y del de cientos de investigadores. La única diferencia estriba en que ha sido transformado, de problemas a resolver, en modelo a reproducir y a perpetuar. Para ello se propone volver a los siglos más dramáticos de la historia del capitalismo y su Estado, precisamente al mercantilismo; al Estado “del dejar hacer, dejar pasar”; de la explotación salvaje de los trabajadores; de la ausencia de sindicatos y de, otros medios de defensa de los asalariados; de carencia

de seguridad social, de prestaciones laborales y de servicios públicos garantizados por el Estado como parte indirecta y diferida de los salarios o como mínima transferencia social para la supervivencia de la fuerza de trabajo no asalariada; volver a la época de la ausencia de legislación laboral que imponga ciertos límites a la explotación de los patronos, particularmente de la mujer y de los niños; a la época de las extenuantes jornadas de trabajo; en síntesis, el retorno a las condiciones de trabajo y de vida de inicios del siglo XVIII, que dieron lugar a la revuelta proletaria, a la indignación de los críticos sociales y a la conmiseración de los humanistas burgueses.

En cuanto a las sociedades latinoamericanas, es la aceptación de la realidad actual: la mayoría de la población rural vegetando en sus míseras parcelas, sin ningún subsidio ni apoyo estatal, por mínimo que sea, y la libertad absoluta para que los empresarios rurales -bajo cualquiera de sus disfraces- expropien a los campesinos parcelarios y los exploten a nombre de la libre empresa; los pequeños y medianos empresarios comerciales e industriales camuflados como "informales", o la lumpenburguesía sobreexplotando a sus operarios para poder mantenerse en la competencia con el capital monopolista nacional o extranjero (del cual no se dice ni una palabra en el libro, por lo que suponemos que tendría igual "libertad empresarial"); las calles de las ciudades atestadas de vendedores ambulantes, tragafuegos, emboladores, lavacoches, prostitutas, ladronzuelos, pepenadores de desperdicios, cargadores, y todas las formas de supervivencia obligada -carentes de seguridad, asistencia social y protección pública- convertidas en "modelos" de desarrollo y "libre iniciativa"; la ciudad expandiéndose horizontal y anárquicamente al libre albedrío de los propietarios de la tierra, los fraccionadores legales o ilegales, los promotores inmobiliarios y empresarios de todo tipo, sin que se pretenda siquiera algún control o esbozo de planeación estatal; el transporte público abandonado a la imaginación y las decisiones de quienes poseen el dinero para adquirir uno o más vehículos y la audacia para montar una ruta sin ningún control sobre las tarifas, sin que el Estado intervenga creando sistemas más racionales y no contaminantes, llevando a su máximo nivel el caos de la circulación vehicular y la insoportable contaminación ambiental que ya conocemos en muchas ciudades latinoamericanas; y así sucesivamente en todas las actividades productivas y de servicio social.

En lo relativo a la vivienda y a su infraestructura y servicios, ya conocíamos estos planteamientos en la pluma de John F. Turner y su "libertad para construir", o de Robert McNamara, artífice de la agresión imperialista contra Vietnam y de la política de apoyo a la autoconstrucción como "solución" al problema de la vivienda de los sectores populares, aplicada por el Banco Mundial desde 1975; en estos sectores nadie había llegado a formular un modelo tan amplio y global de "desarrollo" para el continente. Es lamentable también observar cómo intelectuales y activistas políticos de izquierda han llegado a confundir las actividades de subsistencia y su necesaria y obligada defensa contra las arbitrariedades de los aparatos estatales, con la prefiguración de formas socialistas y comunitarias de autogestión popular o la "guerra de posiciones" en la conquista del "derecho a la ciudad"; la conciencia adquirida en la lucha económica defensiva, con la conciencia de clase para sí de la necesidad de transformar de arriba a abajo a la sociedad y a la ciudad capitalista actual, terminando por defender las mismas alternativas, aunque "con buena intención", sostenidas y aplicadas por las capas más atrasadas de la burguesía, los liberales de nuevo cuño y las agencias financieras del imperialismo. Parafraseando a Marx, parecería que la historia se repite varias veces: primero, con la "marginalidad"; luego con la "autoconstrucción"; y ahora, con la "informalidad"; pero, aparentemente, siempre como tragedia para los trabajadores.

Las tendencias actuales en lo económico, lo social y lo urbano parecen conducir inevitablemente a una nueva forma de la barbarie. La mistificación que hace la derecha de la "informalidad" acelera este tránsito, al plantear la eliminación hasta de las últimas y más marginales intervenciones del Estado burgués en apoyo a la reproducción de la fuerza de trabajo, haciendo recaer todo el peso de la acumulación de capital y su crisis sobre los hombros de los propios desheredados y explotados.

Por el contrario, un análisis crítico riguroso conduce a la conclusión de que para revertir este curso es necesaria una transformación global de las relaciones económicas y sociales actuales y de la ciudad que las soporta, mediante la autoorganización de los trabajadores, la construcción de una nueva forma de Estado y el control democrático de los recursos naturales, la tecnología y las fuerzas productivas en su

conjunto, y el inicio de una transformación estructural de las formas físico-territoriales. Muchos procesos sociales crean condiciones subjetivas para este cambio, particularmente el despliegue de los movimientos sociales, pero no lo sustituyen ni pueden ahorrar los dolores de parto de una nueva sociedad y ciudad de entre las ruinas creadas por las actuales.

De lo que estamos seguros es de que los trabajadores latinoamericanos no desean la distribución de la pobreza creada por el capitalismo, sino la conquista del derecho al ocio del que hablara Paul Lafargue, que es ya posible gracias al considerable desarrollo de las fuerzas productivas construido con el trabajo de muchas generaciones de obreros en América Latina y el mundo, y que hoy sólo sirve para el enriquecimiento y el despilfarro de una reducida minoría de propietarios capitalistas.